Kiosko y Más - El País (Catalunya) - 12 mar. 2015 - Page #35 http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=2314201503120000000...

Un año sin pacto contra la pobreza

- La Generalitat dice que ha cumplido el 69% de los acuerdos del pleno de 2014
- Entidades y oposición creen que aún no se abordan los temas duros

CAMILO S. BAQUERO
Barcelona

La dura situación social protagonizó hace un año un pleno monográfico en el Parlament. Las estadísticas (19,3% de los habitantes en riesgo de pobreza en 2012, según Idestcat) pero también la realidad a pie de calle (los desahucios, la malnutrición en la escuela o los cortes de suministros básicos) retrataban un panorama de emergencia. Del debate salió un gran paquete de medidas que, en su día, fue criticado por las entidades debido a su falta de ambición y por la falta de presupuesto. Doce meses después, la Generalitat asegura que ha cumplido con el 69% de las mociones. La oposición y las organizaciones hacen un balance con claroscuros. La principal crítica: que los temas más complicados siguen en el tintero.

"No hemos sido capaces de firmar el pacto contra la pobreza, el primer punto", se lamenta Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa del Tercer Sector. Se trata de una herramienta que debería articular toda la estrategia del *Govern* para luchar contra la desigualdad. "Si no se ha avanzado en un año, menos se hará con las elecciones encima", agrega Guiteras. "Si hubiera voluntad, ya se habría firmado", denuncia la diputada Laura Massana (ICV).

Hace menos de un mes, la presidenta del Tercer Sector no dudó en decirle a los participantes de Tribuna Cataluña, que "estamos peor que hace un año", a pesar de la mejora macroeconómica. Las cifras le dan la razón: la tasa de pobreza ha crecido el 0,5% (19,8 % en 2013), los desahucios han aumentado el 7,3% y hay 34.000 familias sin ingresos.

Guiteras ve positivo que la Generalitat, gracias a un acuerdo con Esquerra, haya dotado presupuestariamente el fondo contra la pobreza energética y aumente la dotación de la Renta Mínima de Inserción (RMI). "El instrumento contra el corte de suministros funciona mucho mejor que el diseñado hace un año, aunque hay que revisar los casos donde aún se deja de prestar el servicio pese tener el informe de servicios sociales", dice.

Dos niños en un comedor social, en Barcelona. / ALBERT GARCIA

La Mesa del Tercer Sector ve positiva la lucha contra los cortes de energía

Otro de los avances, que también resaltan las entidades que trabajan con la infancia es el de la lucha contra la malnutrición durante el verano, gracias a convocatorias extraordinarias del Departamento de Bienestar, o la clarificación de los baremos de entrega de las becas comedor.

Guiteras, sin embargo, ve todavía en el tintero un tema importante: revisar el mapa de las prestaciones sociales. "Es la manera de reformarlas para dar una mejor respuesta a la pobreza actual", dice. Una crítica a la que se suma el diputado del PP Rafael López, que critica que no se revise el Plan Estratégico de Servicios Sociales. "Hay desidia. Solo hay voluntad para el independentismo", asegura. Desde Ciutadans también critican "el exceso" de esfuerzos del Ejecutivo catalán en promover la ruptura. "El gasto identitario serviría para pagar la deuda a las entidades del tercer sector, que son la malla que aún sostiene la cohesión social", dice el diputado José María Espejo.

El republicano Pere Bosch acepta que los alcances de las medidas aprobadas es muy variado, lo que hace injusto un balance general. "Hacen falta indicadores para poder evaluar mejor", dice. La reforma de la RMI, considera, es un tema muy importante que sigue sin ser abordado. Massana cree que el 69% de ejecución de la que habla la Generalitat hace referencia a temas menores o sin presupuesto. "Por ejemplo, el derecho a la alimentación se incluye dentro de la cartera. Pero no se explica quién o cómo se pagará", se queja.

Los socialistas, por su parte, señalan la necesidad de presentar pronto el Informe de Evaluación de las políticas de inclusión social en Cataluña y retirar los puntos "más lesivos de la reforma de la RMI" de 2011, a la espera de que se debata la Renta Garantizada de Ciudadanía. "Llevamos años de medidas paliativas. ¿Cuándo plantearemos las medidas drásticas de fondo?", pide Lucía Guerrero de la Junta del Colegio de Trabajadores Sociales de Cataluña.

Multa de 1,2 millones por el daño a un bebé

EMILIO DE BENITO, **Madrid**

La Clínica Tambre de Madrid tendrá que indemnizar a una pareja con 1,2 millones de euros como consecuencia de las secuelas con las que nació su hija en 2012. Según el fallo del juzgado número 43 de Madrid, la niña "padece un deterioro muy grave de las funciones cerebrales superiores".

En 2011, la pareja acudió a la clínica para someterse a una fecundación *in vitro*. En las pruebas previas, la mujer presentó una "serología positiva para el virus citomegalovirus (CMV)". Pero "estos resultados fueron ignorados por la Clínica", señala la sentencia. La niña nació con "un retraso grave en el desarrollo".

El CMV está presente en muchas personas. En la mayoría no causa secuelas, pero esto sí ocurre cuando la persona está inmunodeprimida. El Centro de Control de Enfermedades de EE UU establece que "alrededor del 80% de los bebés nacidos con la infección nunca tienen problemas. Sin embargo, algunos tienen defectos de nacimiento, como discapacidades del desarrollo".

Según recoge el fallo, una de las líneas de defensa de la clínica argumenta "falta de prueba del nexo causal entre los resultados de la analítica" de la madre y "la dolencia de la menor". En su argumentación, el juzgado considera probado que la mujer "estaba infectada" y que "la niña nació con la patología descrita, motivada por la transmisión durante la gestación". Por ello concluye que "el resultado fue la práctica de la técnica de fecundación sin la observancia de las reglas de las[prácticas médicas aceptadas".

BNK necesita diez hectáreas de suelo público para sus pozos de 'fracking'

La empresa pide 21 parcelas más en Burgos para captar el agua que requiere

MANUEL PLANELLES, **Madrid**

La canadiense BNK, que aspira a ser la primera empresa que usa la controvertida técnica del *fracking* en España, necesita 103.136,06 metros cuadrados de suelos municipales (más de diez hectáreas) solo para poder instalar las plataformas con las que pretende perforar hasta seis pozos exploratorios, que alcanzarían una profundidad máxima de 4,5 kilómetros. Para hacerse con estos terrenos públicos —englobados dentro del proyecto Sedano, al norte de Burgos— necesitará que la Administración autorice su ocupación temporal. Varios municipios se han negado a venderle o alquilarle las tierras.

Para los otros seis sondeos que quiere hacer también en la provincia de Burgos —incluidos en el proyecto Urraca—, la compañía ya ha adquirido tres parcelas de 106.450 metros cuadrados.

El *Boletín Oficial del Estado* (BOE) publicó ayer el inicio del proceso de información pública de estos dos proyectos. La empresa persigue que la Junta de Castilla y León (en el caso de Sedano) y el Gobierno central (en Urraca) le concedan las declaraciones de impacto ambiental favorables para utilizar la fractura hidráulica. De momento, y aunque se incluyen hasta 12 perforaciones, se trata de sondeos exploratorios. Sin embargo, en el BOE también se apunta a "ensayos de producción".

BNK es la empresa que más lejos ha llegado, desde el punto de vista administrativo, en su intención de usar *fracking* en España, que consiste en inyectar a través de un pozo agua a presión mezclada con arena y productos químicos para romper la roca en la que se aloja el gas. Ahora, las Administraciones, asociaciones y particulares podrán alegar contra los proyectos, que cuentan con un amplio rechazo en los cinco municipios burgaleses afectados.

Los pozos, según la información del BOE, se ubicarían en los términos de Medina de Pomar, Merindad de Cuesta Urría y Villarcayo, en el caso de Urraca. Las perforaciones del otro proyecto estarían en Merindad de Río Ubierna y Valle de Sedano. En los lugares elegidos para instalar las plataformas, se haría primero la "adecuación de terrenos", "cerramientos" y la construcción de "balsas de almacenamiento de agua limpia y de escorrentía".

Pero los trabajos no se limitarán a esas parcelas, también necesitaría utilizar otras colindantes. Para poder lograr el agua que BNK necesita para el proceso de inyección y demás trabajos, la empresa solicita también en los expedientes publicados en el BOE la ocupación temporal de 21 parcelas más. La mayoría de estos terrenos son públicos; pertenecen a Ayuntamientos de la zona, juntas vecinales, el Ministerio de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Ebro. Solo una de esas parcelas es de un particular.

El excesivo empleo de agua es uno de los problemas que habitualmente se le achaca al *fracking*. BNK sostiene que "utilizará aproximadamente 2.000 metros cúbicos durante la etapa de perforación". Luego, cada vez que emplee la "estimulación hidráulica" necesitará 1.000 metros cúbicos más. En la información publicada ayer en el BOE, no aparece el consumo total de agua que tiene previsto emplear la empresa BNK.

Respecto a las perforaciones, la intención de la compañía no es acometer los 12 pozos al mismo tiempo. BNK sostiene que cada pozo necesita una inversión de entre 10 y 20 millones de euros.

Printed and distributed by PressReader
PressReader.com + +1 604 278 4604